

Cesión de datos. Cesión de datos de facturación de las oficinas de farmacia. Informe 119/2006

La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, de las transmisiones de datos establecidas en el contrato celebrado por la misma con distintos almacenes mayoristas, a fin de conocer las circunstancias y el precio al que han sido vendidos finalmente los medicamentos vendidos a su vez por la consultante a los citados almacenes mayoristas.

De este modo, el sistema previsto en el contrato permitiría al laboratorio consultante conocer las ventas efectuadas por los almacenes a las oficinas de farmacia, que deberán someterse al régimen de precios previsto en el artículo 100 de la Ley del Medicamento y a lo dispuesto en el Real Decreto 725/2003, de 13 de junio. Asimismo, podría conocerse mediante la implantación del sistema las ventas efectivamente realizadas por cada oficina de farmacia de los medicamentos adquiridos por éstas a los almacenes. Con ello, se pretende, en suma, conocer las unidades finalmente vendidas con sometimiento al régimen de precios previsto en las citadas normas y las que, en su caso, hubiesen sido objeto de exportación paralela y, por ello, vendidas a precio libre.

Dentro de las previsiones del contrato se establece que el sistema de información será mantenido y gestionado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y que en el mismo se incluirán los datos identificativos de los almacenes mayoristas y del titular de cada oficina de farmacia, siendo ésta la cuestión que ha suscitado mayores dudas en cuanto a la aplicación al caso de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999.

II

Antes de dar respuesta a las cuestiones planteadas, debe hacerse referencia a lo que en otras ocasiones se ha señalado por esta Agencia Española de Protección de Datos en relación con esta cuestión, habida cuenta que ello resulta esencial para resolver la cuestión planteada.

En este sentido, los antecedentes pueden resumirse en los siguiente:

En fecha 27 de junio de 2001 fue dada respuesta por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos a una consulta formulada por el laboratorio ahora consultante en la que se planteaba la aplicabilidad de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 a los datos de facturación de las oficinas de farmacia.

En el citado informe, tras analizarse la actividad de las oficinas de farmacia y de los profesionales titulares de la misma, se tenía en cuenta la doctrina derivada de los informes emitidos por el Tribunal de Defensa de la Competencia y la jurisprudencia de las Salas Primera y Tercera del Tribunal Supremo, a fin de analizar si los datos de facturación de las oficinas de

farmacia debían considerarse sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

El contenido de dicho informe tenía en cuenta la doctrina hasta entonces sostenida por la Agencia Española de Protección de Datos, en cuya virtud resultaba necesario diferenciar dentro de los datos relacionados con los empresarios individuales y profesionales aquellos datos relacionados con la esfera profesional o empresarial de aquéllos que no revestían tal condición, de forma que sólo el tratamiento de éstos últimos se encontraban sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

De este modo, y tomando en consideración dicha premisa y el análisis doctrinal y jurisprudencial al que se ha hecho referencia, el informe concluía que “En consecuencia, siendo necesario diferenciar, a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, los datos referentes a la actuación profesional del farmacéutico de aquéllos otros que se corresponden con su condición de empresario, por ser titular del establecimiento consistente en una oficina de farmacia, y encontrándose los datos a los que se refiere la consulta en el segundo de los supuestos citados, la cesión de dichos datos no se encuentra sujeta al ámbito de la LORTAD”.

Esta doctrina fue mantenida por la Agencia en Resolución de 11 de septiembre de 2000, en la que, en relación con los datos de facturación de una determinada oficina de farmacia, y su tratamiento por un Colegio Oficial de Farmacéuticos, se mantenía el razonamiento jurídico derivado del anterior informe.

Posteriormente, en fecha 5 de julio de 2005 fue informada favorablemente la norma de creación del fichero de control de distribución del gasto farmacéutico, mantenido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en virtud del Convenio de encomienda de gestión firmado entre el citado Consejo y el Ministerio de Sanidad y Consumo de 17 de junio de 2005, para el desempeño por el Consejo de las competencias necesarias para el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Real Decreto 725/2003. En todo caso, el contenido del citado informe debe considerarse referido a la naturaleza de las farmacias como establecimientos sanitarios y a la actuación del farmacéutico en su condición de profesional sanitario.

Por último, en fecha 20 de octubre de 2005 fue sometida al parecer de la Agencia consulta formulada en la que se hacía referencia a las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre la distribuidora y el laboratorio ahora consultante, así como las obligaciones impuestas al mismo en cumplimiento de las funciones atribuidas al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en virtud del ya citado Convenio de encomienda de gestión.

El informe resultante de la consulta alcanzaba dos conclusiones, la primera de las cuales se refería a la aplicabilidad de la Ley Orgánica 15/1999 a los datos referidos al titular de la oficina de farmacia; la segunda analizaba las distintas obligaciones de la consultante en relación con el contrato celebrado

con el laboratorio y las obligaciones derivadas del Convenio de encomienda de gestión.

Respecto a la aplicabilidad de la Ley Orgánica 15/1999 a los datos de los titulares de las oficinas de farmacia, y después de recordar lo señalado por la Agencia en su informe de 27 de junio de 2001, se ponía de manifiesto lo señalado hasta esa fecha por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 a los datos referidos a los profesionales y se concluía que “los datos referidos a la facturación de las oficinas de farmacia están sometidos a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999”.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, se extraían las siguientes conclusiones:

- La cesión por los almacenes mayoristas de los todos los datos contenidos en el apartado de “estructura básica y tipos de datos” del fichero de control del suministro y distribución de especialidades farmacéuticas en el territorio nacional será conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.
- La habilitación para la cesión de los datos al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a la que se refiere la anterior conclusión no se deriva del contrato celebrado entre la consultante y el laboratorio, sino de la habilitación legal que justifica ese tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/1990, la Ley 16/2003, el Real Decreto 725/2003, el Convenio de encomienda de gestión entre el citado Consejo y el Ministerio de Sanidad y Consumo de 8 de junio de 2005 y la norma reguladora del fichero de control del suministro y distribución de especialidades farmacéuticas en el territorio nacional.
- Los almacenes mayoristas no podrán facilitar al laboratorio los datos referidos a las oficinas de farmacia sin contar con el consentimiento de su titular, de forma que dicha información únicamente podría facilitarse previa disociación de los datos de las oficinas, en términos similares a los derivados de las certificaciones previstas en el apartado 4 del artículo único del Real Decreto 725/2003.

En consecuencia, el mencionado informe aclaraba que los almacenes mayoristas se encontraban obligados a facilitar al Consejo General los datos referidos a las unidades efectivamente vendidas a cada oficina de farmacia de modo individualizado y no meramente agregado, a fin de que por el mismo se desarrollasen las funciones atribuidas en virtud del Convenio de encomienda de Gestión al que reiteradamente nos hemos referido. Del mismo modo, se concluía que los almacenes no podrían facilitar al laboratorio ahora consultante los datos de ventas de las oficinas de farmacia en caso de que se contuviera

en la información el dato de su titular, si bien dicha comunicación podría ser posible previa disociación de los datos, de forma que la oficina de farmacia fuera identificada de forma objetiva y no necesariamente por el nombre de dicho titular.

III

Dicho lo anterior, y entrando ya en el examen de la consulta ahora planteada, debe tenerse en cuenta por esta Agencia la reiterada doctrina manifestada por el Tribunal Supremo, de forma uniforme, tanto en la jurisprudencia derivada de su Sala Primera como en la de su Sala Cuarta, en el sentido de reconocer la naturaleza dual de las oficinas de farmacia.

A tal efecto, debe recordarse que en el informe de fecha 27 de junio de 2001, emitido, como ya se ha señalado, en virtud de consulta formulada por el laboratorio ahora consultante, se resumía la jurisprudencia en esta materia, indicándose lo siguiente:

“La misma conclusión se alcanza a la vista de la ingente jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, tanto de su Sala de lo Civil como de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha venido a perfilar la naturaleza jurídica de la oficina de farmacia como la de un establecimiento mercantil o un local de negocio, siendo lógica consecuencia la configuración del farmacéutico cuando actúa en su condición de titular de la misma como un auténtico empresario, con independencia de que el mismo revista o no forma societaria, en los términos previstos por los artículo primero y siguientes del Código de Comercio.

*Así, en primer lugar, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1979, señala en su considerando segundo que “**las farmacias son locales de negocio**, como así lo tiene declarado la Jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 24 enero 1953, 31 enero 1962 y 25 marzo 1964, al afirmar que en ellas se realiza, con establecimiento abierto, una actividad comercial, consistente en la preparación y venta de productos medicinales con el lógico deseo de obtener una ganancia, así como en adquirir en los centros productores toda clase de específicos y géneros farmacológicos para igualmente conseguir un lucro en la reventa de los mismos, **función esta propia del Código de Comercio en cuanto va incluida en el concepto de actos mercantiles que define el art. 325 del mismo, sin que la circunstancias de estar limitado el ejercicio de esta actividad negocial a las personas que se hallen en posesión del correspondiente título haga perder el carácter de mercantil a la función que las mismas ejercen**”, considerando que la oficina de farmacia comprende “no sólo el local y elementos accesorios del mismo, sino, como la sentencia recurrida expresa al aceptar el considerando de la de primer grado que así lo dice, **el negocio o empresa comprensivo de las existencias, clientela, derecho de traspaso y demás que del***

mismo deriven, siendo dicho local y elementos accesorios el soporte físico de esa actividad comercial

Con mayor concreción, si cabe, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1998 (Art.9143), señala en su Fundamento de Derecho segundo, de forma terminante que “en cuanto titular de una oficina de farmacia, el farmacéutico actúa como profesional de la sanidad, pero también asume la condición de titular de una actividad comercial”, ahondando en este criterio por el hecho de que “el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueban las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y la instrucción para su aplicación, contiene en su sección primera «Actividades empresariales: industriales, comerciales, de servicios y mineras», dentro del Grupo 652, el Epígrafe 652.1 «Farmacias: Comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal»”.

Posteriormente, tras indicar que “esta doble condición del farmacéutico no atenta contra el contenido de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 103 de la Ley General de Sanidad, y ha sido declarada en numerosas sentencias de este Tribunal, que no por ello han establecido una confrontación entre ambas calificaciones, puesto **que al atribuir a la oficina de farmacia el carácter de establecimiento sanitario no han negado su condición de establecimiento mercantil, y viceversa**”, la citada Sentencia viene posteriormente, y tras referir lo indicado en la Sentencia de 26 de febrero de 1979, ya citada, a resumir la doctrina del Tribunal Supremo en la materia, en los siguientes términos: “con relación al titular de la oficina de farmacia, la Sentencia de 12 marzo 1996 declaró que «el anuncio de un establecimiento farmacéutico en la vía pública, autorizable o no, constituye un medio de comunicación de una persona física en el ejercicio de una actividad profesional y comercial (...)». Y las Sentencias de 10 mayo 1990 y 4 abril 1997 se refieren, respectivamente, al farmacéutico como titular de una actividad comercial y como profesional sanitario, y a las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios con independencia de su consideración mercantil e industrial. La Sala comparte este criterio y aprecia que **el farmacéutico puede realizar más de una actividad empresarial - venta de productos farmacéuticos y de otros artículos, tales como gafas, ortopédicos, etc.-, además de desarrollar su actividad profesional**”

También, con posterioridad a la realización del citado informe, el Tribunal Supremo ha venido manteniendo el mismo criterio. Así, la Sentencia de la Sala Tercera de 9 de febrero de 2004 señala:

“Este Tribunal ha declarado reiteradamente el carácter comercial de los establecimientos de farmacia, llegando a precisar en la sentencia de 26 de febrero de 1979 (rj 1979/525), dictada por la Sala de lo Civil, que “las farmacias son locales de negocio” y en ellas se realiza “con establecimiento abierto, una actividad comercial consistente en la

preparación y venta de productos medicinales con el lógico deseo de obtener una ganancia, así como adquirir en los centros productores toda clase de específicos y géneros farmacológicos para igualmente conseguir un lucro en la reventa de los mismos, función esta propia del Código de Comercio, en cuanto va incluida en el concepto de actos mercantiles que define el art. 325 del mismo, sin que la circunstancia de estar limitado el ejercicio de esta actividad comercial a las personas que se hallen en posesión del correspondiente título haga perder el carácter mercantil a la función que las mismas ejercen”.

Por último, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 19 de enero de 2005 recuerda que *“Los titulares de Oficinas de Farmacia no pueden considerarse profesionales liberales, en ese punto, y en su condición de comerciante, que la tienen, a pesar de sus particularidades, son miembros de las Cámaras de Comercio e Industria”,* por lo que los farmacéuticos se encuentran obligados al pago del recurso cameral permanente, establecido por la Ley Básica de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

Esta sentencia recuerda además que *“la Oficina de Farmacia es un “local comercial” sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos”.* Además *“los mancebos son dependientes de un empresario y gozan de los beneficios de la relación laboral, tanto desde el punto de vista de la cotización como de la jubilación, lo que supone que la Farmacia es una empresa”.* Por último, señala también que *“el impuesto de Actividades Económicas, que distingue claramente entre los comerciantes Farmacéuticos, en la Agrupación 65, apartado 652, 1 y los Farmacéuticos que ejercen su función como profesionales liberales (análisis clínicos, etc.) que tributan como profesionales”.*

En resumen, nada puede esta Agencia objetar al hecho de que el farmacéutico en su condición de titular de una oficina de farmacia ostenta la condición de empresario, siendo además la oficina de farmacia un establecimiento mercantil.

En relación con esta última cuestión, debe también recordarse el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre la competencia en el sector farmacéutico, elaborado en 1995, y también citado en nuestro informe de 27 de junio de 2001, en que se señala terminantemente:

“En resumen, se viene a configurar la oficina de farmacia como un establecimiento mercantil, concebido como el conjunto de bienes y servicios que permiten a un empresario desarrollar su actividad empresarial, en los términos previstos en el Código de Comercio o en el Capítulo Segundo de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión, o como industria o negocio, en el sentido que definía el artículo 3.2 de la derogada Ley de Arrendamiento Urbanos, de 24 de diciembre de 1964, como “una unidad patrimonial susceptible de ser directamente explotada o pendiente para serlo de meras formalidades administrativas”.

Al propio tiempo, no debe olvidarse que dicha naturaleza es, como se ha venido indicando, dual, ostentando su titular la condición de profesional y el establecimiento la condición de establecimiento sanitario, además de la de establecimiento mercantil.

Así, dispone el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, que “En los términos recogidos en la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, y la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas”. Al propio tiempo, se añade que el farmacéutico titular-propietario de la oficina deberá desarrollar en la misma los servicios básicos a la población que el propio precepto enumera.

IV

Consecuencia de todo lo que se ha indicado es que debe reiterarse la opinión de esta Agencia, ya manifestada en anteriores informes en el sentido de considerar que el dato de facturación de las oficinas de farmacia ha de ser considerado como dato referido a la facturación de un establecimiento mercantil.

Esta conclusión permitirá continuar en el análisis de la solución que habrá de darse en el presente supuesto, aunque no resuelve terminantemente la cuestión planteada en lo referente al sometimiento o no de los datos de facturación de las oficinas de farmacia que incorporen la identificación de su titular a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999.

Para continuar en el análisis de la cuestión debe tenerse en cuenta la necesidad de diferenciar al empresario individual del establecimiento mercantil en que aquél desarrolla el comercio. Esta diferencia resulta sumamente relevante en el caso de las oficinas de farmacia, dado que el farmacéutico habrá de ejercer su actividad de dispensación así como las restantes actividades profesionales previstas en la Ley 16/1997, precisamente, a través del establecimiento mercantil en que se constituye la oficina de farmacia y dicho establecimiento por imperativo del artículo 103.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad deberá tener por titular o propietario, precisamente, a un farmacéutico.

Pues bien, de los términos que se desprenden de la documentación adjunta, el contrato celebrado entre la consultante y los almacenes mayoristas no tiene por finalidad última el conocimiento de ningún dato relacionado directamente con el farmacéutico, sino del dato objetivo de facturación del establecimiento mercantil que constituye la oficina de farmacia.

Ahora bien, en el contrato se hace referencia a la necesaria identificación del titular de la oficina, lo que plantea las dudas relativas a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 que afloraron como consecuencia de la elevación del informe de 20 de octubre de 2005, al que nos hemos referido con

anterioridad. Por ello, será preciso tratar de dar solución a la cuestión planteada, partiendo del hecho de que el objeto del contrato es conocer el volumen de facturación del establecimiento mercantil oficina de farmacia y no obtener datos referidos directamente al farmacéutico.

Así, el objeto del contrato no quedaría variado en caso de que se obtuviese la identificación de la oficina a través de algún dato identificativo del establecimiento mercantil, como sucedería en caso de facilitarse el dato correspondiente al rótulo de dicho establecimiento, su denominación objetiva, en caso de tenerla o una circunstancia objetiva distinta, como por ejemplo, la dirección en que se encuentra ubicado dicho establecimiento. Con dicha información, el objeto del contrato se vería cumplido y no sería precisa analizar la incidencia que sobre dicha cuestión plantea la aplicación de la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

En este sentido se pronunciaba el informe de 20 de octubre de 2005 al indicarse que la cesión del dato del titular no sería posible si no se veía sometida a un previo procedimiento de disociación, siendo así que la utilización de los identificadores a los que acaba de hacerse referencia permitirían precisamente lograr la disociación del dato del titular de la oficina.

V

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Ley no impone la obligación de denominar a la oficina de farmacia por el dato referido al nombre y apellidos de su titular. En efecto, si bien es requisito imprescindible para la existencia de la oficina de farmacia que la misma sea titularidad o propiedad de un farmacéutico, como se acaba de indicar y que, por razones de garantizar el cumplimiento de dicho requisito, los datos identificativos del o de los titulares de la oficina figuren de forma visible en la fachada del establecimiento mercantil, no existe ninguna norma estatal o autonómica que imponga la obligación de denominar al establecimiento por los datos identificativos del titular.

Así, a modo de ejemplo, la Ley 19/1998, de 25 noviembre Ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, dispone en su artículo 30 que “Todas las oficinas de farmacia estarán convenientemente señalizadas. Dispondrán de un letrero donde figure, en caracteres fácilmente visibles, la palabra «Farmacia»; así mismo contarán con una cruz griega o de malta verde”, añadiendo que “En la fachada principal y situada en un lugar visible existirá una placa que identifique al farmacéutico titular”. No obstante, en ningún lugar establece la citada Ley la obligación de que el establecimiento mercantil en que consiste la oficina de farmacia haya de ser denominado a todos los efectos por el nombre de su titular o propietario ni que esa haya de ser la identificación de la empresa a todos los efectos. Similar conclusión cabe alcanzar a la vista de lo dispuesto en la normativa de otras Comunidades Autónomas.

Lo que acaba de indicarse resulta sumamente relevante a los efectos que se están analizando, dado que ello lleva aparejada la conclusión de que no

será preciso conocer los datos identificativos del titular de la oficina de farmacia para que pueda accederse por parte de la consultante a los datos de facturación por parte de la misma de sus medicamentos.

VI

El problema podría plantearse en los supuestos en que en virtud de una libre decisión del titular de la oficina de farmacia haya decidido denominarse dicho establecimiento mercantil con sus propios datos identificativos, ya sea como consecuencia de una decisión de estrategia empresarial, no olvidemos la naturaleza de comerciante del titular de la oficina a la que nos hemos referido, ya sea en virtud de cualquier otra causa.

En ese supuesto, como consecuencia de la mencionada decisión, sería posible que al accederse a los datos de facturación de la oficina a partir de la denominación de la misma no se accediese a una mera denominación objetiva, sino a los datos de nombre y apellidos o a alguno de estos datos, del titular de la oficina, por lo que podría considerarse aplicable al caso el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con la definición otorgada al mismo del concepto de datos de carácter personal, dado que el nombre y apellidos harían identificable al titular.

No obstante, el hecho de que el establecimiento mercantil se denominase con el nombre y apellidos del titular no convertiría dicho establecimiento en una persona física.

En este sentido, debe recordarse que la legislación mercantil impone en determinados supuestos la obligación de que la denominación social de una determinada persona jurídica se corresponda precisamente con los datos identificativos de los socios que la componen.

Así, el artículo 126 del Código de Comercio señala que “la Compañía colectiva deberá girar bajo el nombre de todos sus socios, de algunos de ellos o de uno solo, debiéndose añadir, en estos dos últimos casos, al nombre o nombres que se expresen las palabras «y Compañía»”

Igualmente, según el artículo 146 del propio Código “la compañía en comandita girará bajo el nombre de todos los socios colectivos, de algunos de ellos o de uno solo, debiendo añadirse, en estos dos últimos casos, al nombre o nombres que se expresen las palabras «y Compañía», y en todos, las de «sociedad en comandita»”.

Por último, en relación con la denominada Sociedad Limitada de la Nueva Empresa, el artículo 131 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, introducido por la Ley 7/2003, de 1 abril, dispone que “La denominación social estará formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores seguidos de un código alfanumérico que permita la identificación de la sociedad de manera única e inequívoca”.

Al propio tiempo, la legislación reguladora de las marcas y signos distintivos no establece limitación alguna a la posibilidad de que las marcas o los rótulos de los establecimientos mercantiles puedan identificarse por un nombre y apellidos, siempre que se respeten los restantes requisitos impuestos por la Ley.

De todo ello se desprende que existirán supuestos en los que los datos identificativos de una persona física puedan corresponderse con la denominación de una persona jurídica, el rótulo de un establecimiento mercantil o la marca de un determinado producto o servicio o de una gama de los mismos. Sin embargo, ello no alterará el hecho de que dichas denominaciones identificarán a la persona jurídica, al establecimiento o al producto o gama, sin que puedan ser considerados a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 como datos de carácter personal.

La misma conclusión podrá alcanzarse en los supuestos en que el titular de una oficina de farmacia decida identificar su establecimiento con sus propios datos identificativos, sin que ello implique la conversión del establecimiento en una persona física a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999.

VII

Lo que se ha venido razonando hasta el presente momento conduce a la conclusión de que sería posible la comunicación al laboratorio consultante de los datos identificativos del establecimiento mercantil oficina de farmacia sin que ello implicase necesariamente una cesión de datos de carácter personal.